

Antofagasta, a uno de abril de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

La comparecencia de María Rojas Erbetta, abogada, quien en favor de Brayan Marcelo Julio Veliz, dedujo recurso de amparo en contra de la Dirección Nacional Gendarmería de Chile, solicitando que se deje sin efecto el traslado dispuesto en la Resolución N°6549/2021 y cualquier otro acto administrativo que este haya dispuesto y se ordene el retorno inmediato del amparado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, desde la Unidad de Puerto Montt.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la acción se fundó en el acto ilegal y arbitrario consistente en el traslado del amparado a la Unidad Penal de Puerto Montt, conforme a la resolución exenta N°6549/2021 del 15 de diciembre de 2021, sin previo aviso ni señalamiento de causa, en contravención a lo dispuesto en el artículo 6 N°12 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, del artículo 53 del D.S. N°518 y vulnerando el



artículo 19 N°1 y 7 de la Constitución Política de la República.

El recurrente está cumpliendo una condena de trece años, pero por su buena conducta, fue postulado al beneficio de libertad condicional en el segundo semestre del año 2021.

Refirió que se encontraba clasificado en el módulo 32 del Centro de Cumplimiento de Penitenciario de Antofagasta, por mantener arraigo en esta ciudad, donde viven sus padres, hermanos, pareja e hijo lactante, quienes lo visitaban constantemente. Además, se desempeñaba como monitor de deporte y de reciclaje, por contar con capacitación para ello.

Asimismo, indicó que no se le avisó con anticipación de su traslado, ni se le permitió llevarse sus pertenencias.

Alegó la falta de fundamentación del acto administrativo, pues se ha señalado por la jurisprudencia que se debe dar preeminencia al cumplimiento de una condena en recintos penitenciarios próximos al lugar donde vive la familia del condenado, como lo señala la normativa y fue omitido por el acto que se impugna. Adicionalmente, en el acto no se hizo



referencia al informe técnico que avalaría el traslado.

Finalmente señaló que existe una contradicción en lo señalado por Gendarmería a la familia, al indicar que se trataría de un líder negativo en el modulo y que no podría ingresar a otros, porque no se condice con el hecho de que no ha sido trasladado de módulo previamente y que durante el 2021 obtuvo calificaciones de conducta muy buena.

Por lo tanto, solicitó que se deje sin efecto el traslado dispuesto en la Resolución N°6549/2021 y cualquier otro acto administrativo que este haya dispuesto y se ordene el retorno inmediato del amparado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta.

**SEGUNDO:** Que informó Christian Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile, solicitando el rechazo de la acción con costas, en base a que no existe vulneración a los derechos y garantías del recurrente, ya que el actuar del Servicio se ajustó a la normativa vigente.

Tras referirse a los antecedentes penales del amparado, señaló las circunstancias de su traslado al Centro Penitenciario de Puerto Montt,



de conformidad a resolución exenta de diciembre del presente, donde se encuentra clasificado como interno de alto compromiso delictual. El traslado se produjo previo requerimiento del Director Regional, por motivos de medidas de seguridad y segmentación agotada en el penal, atendido a que el grupo de reclusos que se trasladó, habían sido expulsados por sus pares del módulo que habitaban. El amparado fue calificado como un líder negativo del módulo, refractario al régimen interno y según información anónima, abusaba física y psicológicamente del resto de población penal, no permitiendo a internos nuevos ingresar al módulo. A su vez, se indicó que él no puede ser cambiado de módulo -pese a haberse realizado dos cambios previamente- por temor a ser agredido, ya que se ha visto envuelto en constantes riñas.

Los antecedentes referidos fueron informados al Juzgado de Garantía de Antofagasta, en virtud de cautelas de garantías de fechas 20 de enero y 3 de febrero del presente, en causa RIT 10.985-2014. Adicionalmente se informó al Juzgado que es inconveniente acceder a la solicitud de traslado a otro Centro Penitenciario de la zona. En primer lugar, porque estas



unidades penales no cuentan con cupo ni medidas de seguridad para un interno con las características del amparado, quien cuenta con dos faltas graves al régimen interno, mostrando nulo apego a las normas intrapenitenciarias, lo que se refleja en las calificaciones de los dos últimos bimestres y; en segundo lugar, porque se encuentra calificado como población penal de riesgo, por presentar una fuga consumada, ser líder de desordenes masivos y de una banda al interior de la unidad penal.

Por lo tanto, la decisión de traslado se adoptó teniendo a la vista los antecedentes técnicos y de seguridad personal del amparado, cumpliendo con las directrices del artículo 6 N°12 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Asimismo, refirió que no existe vulneración al derecho a la unificación familiar, atendido a que este admite excepciones en los términos del artículo 53 inciso 2° del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, al referirse a que los condenados deben ser reclusos "preferentemente" cerca de su lugar habitual de residencia. Por lo tanto, los internos pueden ser reclusos en lugares alejados de aquella, cuando



se verifiquen hechos que pongan en riesgo su seguridad.

Señaló que es efectivo que el amparado fue postulado al beneficio de libertad condicional, pero esta fue desestimada por la Comisión, atendida la ponderación del informe psicosocial de postulación. Sin embargo, tras la postulación y antes de que esta fuera resuelta, el actor fue sorprendido con un teléfono -configurándose una hipótesis de falta grave- por lo que su comportamiento debió ser recalificado.

Finalmente, indicó que el recurrente se encuentra en buen estado de salud y sin problemas físicos, cuenta con vestimenta y no ha tenido conflictos con el resto de la población penal.

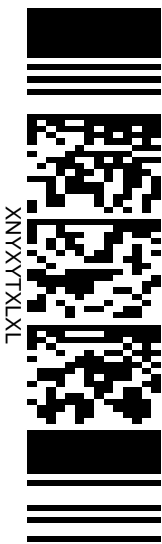
**TERCERO:** Que el recurso de amparo se ha establecido en favor de todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes o respecto de la persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual, debiéndose adoptar las medidas que se estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.



**CUARTO:** Que de las alegaciones de las partes se desprende que lo que se pretende a través de la acción deducida, es el traslado del amparado de vuelta al centro penitenciario de Antofagasta, ya que habría sido traslado en contravención a la normativa vigente.

**QUINTO:** Que para resolver se tendrá presente que el D.L N°2859 del Ministerio de Justicia, que estableció la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en su artículo 3 dispone que *"Corresponde a Gendarmería de Chile: a) Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos.(...)"*. Asimismo, en cuanto a las facultades y obligaciones del Director Nacional, en el artículo 6 se establece la de *"N°12. Determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente"*.

A su turno, la normativa que regula el ejercicio de las facultades de Gendarmería al interior de las unidades penales del país, es el D.S. N°518/1998 del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.



Esta norma, en lo relativo a los traslados que dispone en su artículo 28 que "Por Resolución fundada del Director Nacional, quien podrá delegar esta facultad en los Directores Regionales, serán ingresados o trasladados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto.

Estas medidas podrán adoptarse en razón de la reincidencia, tipo de delito, de reiteradas infracciones al régimen normal de los establecimientos penitenciarios, de requerimientos sanitarios, y de otros antecedentes de carácter técnico que las hagan necesarias.

Este régimen de extrema seguridad no tendrá otro objetivo que la preservación de la seguridad de los internos, sus compañeros de internación, del régimen del establecimiento, de los funcionarios, y de las tareas impuestas a la administración y en su cumplimiento se observarán todas las normas de trato humanitario.

(...)La Resolución que ordene alguna de estas medidas, deberá estar precedida de un informe técnico que las recomiende."

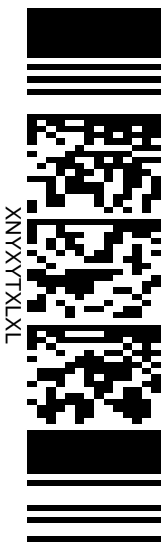




**SEXTO:** Que de la normativa señalada precedentemente se desprende que el traslado de los internos -ya sea de módulo o de establecimiento penitenciario- es parte de las facultades del Director de Gendarmería, y que todo cambio debe sujetarse a la normativa técnica interna, tomando en consideración para ello distintos criterios, como la seguridad de los internos y la peligrosidad de los mismos, atendidos los lineamientos de cada recinto penitenciario.

En consecuencia, considerando los motivos que se expusieron por la recurrida para el traslado de centro penitenciario del amparado, no resulta pertinente ordenar por esta vía su reincorporación al recinto en el que estaba previamente, ya que el fundamento para la negativa a dicha solicitud está comprendida dentro de las facultades y competencias de la institución recurrida. Por lo tanto, **NO** se advierte arbitrariedad o ilegalidad en ella.

**SÉPTIMO:** Que adicionalmente, tampoco debe olvidarse que de conformidad a los objetivos de Gendarmería, plasmados en el artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional, esta Institución tiene como finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que se encuentren privadas de libertad. Entonces, es parte de sus



obligaciones procurar el resguardo de la seguridad e integridad psíquica y física de los internos que se encuentran recluidos en un centro penitenciario.

En consecuencia, lo indicado suma a lo concluido en el considerando precedente, puesto que de los informes acompañados y lo expuesto por las partes, consta que existía un riesgo para el amparado y sus pares en caso de permanecer en el establecimiento que se encontraba previamente, atendida la conducta agresiva de este, lo que fue ponderado al momento de adoptar la decisión de trasladarlo de recinto penitenciario.

**SEXTO:** Que en cuanto a lo alegado por la Defensa, en relación a la contradicción existente entre la alegación de mala conducta del amparado y el hecho de haber sido postulado al beneficio de libertad condicional, debe concluirse que dicha contradicción no es efectiva, puesto que -según se observa de la documentación acompañada- efectivamente el recurrente presentó cuatro bimestres de buena conducta -suficientes para postular al beneficio- hasta el periodo marzo-abril de 2021. No obstante, de igual modo se observa que posteriormente fue sancionado por diversas conductas contrarias al Reglamento, que permanecen incluso ahora en el nuevo Centro



Penitenciario, al contar con una sanción del 31 de enero del presente, por porte o fabricación de armas.

**SÉPTIMO:** Que finalmente, aunque es efectivo que con el traslado se produce un desarraigo familiar del actor respecto a su domicilio de origen, este no resulta arbitrario o ilegal, pues se funda en las razones técnicas que motivaron el traslado, dándose prioridad a la seguridad e integridad física y psíquica del interno.

**OCTAVO:** Que como se ha venido razonando, no puede concluirse que exista un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, que haya vulnerado la garantía constitucional invocada por el recurrente, por lo que necesariamente se rechazará la acción deducida.

**NOVENO:** Que no se condena en costas a la recurrente, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del 19 de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo **SE RECHAZA sin costas**, el recurso de amparo deducido por la Abogada María Rojas Erbetta en favor de



**Brayan Marcelo Julio Veliz** y en contra de la **Dirección Nacional de Gendarmería de Chile**.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Dinko Franulic Cetinic, quien estuvo por acoger el recurso teniendo presente que sin perjuicio de las facultades de la recurrida y que si bien el traslado en sí mismo no resuelta ilegal o arbitrario, situación diversa se manifiesta respecto del lugar al cual se decidió efectuarlo.

Al respecto, se debe tener presente que en el oficio remitido al Juzgado de Garantía -al momento de pronunciarse sobre las solicitudes de cautela de garantías- se informaron los motivos por los cuales no se trasladó a un Centro Penitenciario más cercano al lugar de residencia del amparado y su familia, que responden a la ausencia de cupo, medidas de seguridad e infraestructura necesarias atendido el perfil criminológico del amparado, según consta en su ficha e informe de control de conducta. No obstante, ello no resulta un fundamento suficiente para dicha negativa, ya que no se indica cuáles serían las medidas de seguridad o de infraestructura con las que no se cuenta y en específico por qué el Centro Penitenciario de Puerto Montt sería la única unidad penitenciaria idónea para el traslado.



En consecuencia, atendida la falta de razonabilidad y fundamentación de la decisión respecto del Centro Penitenciario, el acto administrativo deriva en arbitrario y a su vez, en ilegal, por vulnerar el artículo 53 inciso segundo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que consagra el derecho de visitas y de reclusión de los internos en un lugar cercano a su residencia, con la finalidad de resguardar el arraigo familiar del condenado. Ello, porque considerando la evidente lejanía del lugar de cumplimiento con aquel en el que se tiene residencia, dificulta ostensiblemente la posibilidad de que la familia pueda visitar al amparado, aun si solo se considerase el aspecto económico.

Regístrese y comuníquese.

**Rol 68-2022 (AMPARO)**





XNYYTXLXL

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por Ministro Dinko Franulic C., Ministra Suplente Ingrid Tatiana Castillo F. y Abogado Integrante Gabriel Alfonso Sanchez R. Antofagasta, uno de abril de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a uno de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.